

Panorama social de Chile en el Bicentenario.

Ruiz Encina, Carlos y Orellana, Víctor.

Cita:

Ruiz Encina, Carlos y Orellana, Víctor (2011). *Panorama social de Chile en el Bicentenario. Análisis del Año, (13), 27-51.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/httpwww.nodoxxi.cl/12>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pfDv/wzd>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

SOCIEDAD

Panorama social de Chile en el bicentenario

Carlos Ruiz
Víctor Orellana

Literalmente sacudido, en el año 2010 se agolpan muchos acontecimientos cargados de significación social. El terremoto y los disímiles problemas que lo acompañan, de la destrucción y las vidas arrasadas a los dilemas de la pendiente reconstrucción, pasando por el impacto de los saqueos, el miedo, la incertidumbre, una ocupación policiaco-militar inédita para estos tiempos, hasta escandalosos clamores por autoridad (al estilo de discutidos alegatos de Villegas por una crisis generalizada de autoridad en la sociedad chilena, que horada a la familia, la escuela, a las instituciones estatales encargadas del orden, etc.), alterados retratos que poco ayudan a entender lo ocurrido. El año del dramático accidente y rescate de los mineros. De la larga huelga de hambre de prisioneros mapuches, de ecos que superan nuestras fronteras. De la horrible muerte de decenas de presos en el infierno literal de una cárcel chilena. Un recuento que puede seguir hasta consignar cuánto vibró el país entero con el ascenso de la refundada Roja de todos, para acabar el año en la más impensada incertidumbre sobre su futuro.

POBREZA, MEDICIÓN Y REMEDIOS

No obstante, hubo un hecho que atrapó la atención de políticos, columnistas y entendidos, hasta ocupar un sitio central en la discusión política y social del año, tanto por el giro que anota en el camino seguido, como por su origen ajeno a una arena “extra-política” del tipo de aquellos fenómenos que sucumben más fácilmente al manejo bajo códigos de farándula: el aumento de la cifra oficial de pobreza entregada por MIDEPLAN a partir de los registros de la encuesta CASEN de 2009.

Como se sabe, desde 1987 -año en que se realiza la primera medición según la metodología actualmente en uso-, la pobreza había venido bajando sostenidamente, en forma más acelerada hasta 1998, y con una pendiente menor pero igual tendencia a la baja hasta 2006.

En 1987, las cifras oficiales arrojaron un 45,1% de pobreza (del total de hogares a nivel nacional), y un 17,4% de indigencia¹. Luego de una década, hacia 1998, tales índices habían disminuido marcadamente. La pobreza había caído más de la mitad (21,7%), y la indigencia decrecido con mayor fuerza aún (5,6%). La medición de 2006 -el último registro tomado con anterioridad a los polémicos datos de 2009- arrojó un 13,7% de pobreza, y un 3,2% de indigencia². Es decir, consistentes con la tendencia descrita, en un contexto de aumento constante del ingreso y de crecimiento económico sostenido, además de retroceso del trabajo informal y el aumento de la cobertura en educación en todos los niveles (incluida la educación superior).

Sin embargo, según las cifras oficiales, en 2009 la batalla contra la pobreza evidenció su primer revés en veinte años. La encuesta CASEN arrojó una pobreza de 15,1% -superior en 1,4% a la medición anterior- y una indigencia de 3,7%, cinco décimas arriba de la anotada en 2006 (téngase en cuenta que estos registros son anteriores al terremoto, por lo que los costos sociales de dicha devastación aparecerán recién en la próxima medición). La pobreza habría aumentado por primera vez desde 1987. Las reacciones no tardaron en aparecer. El gobierno responsabilizó a la gestión anterior por un diseño y aplicación ineficiente de las políticas sociales, abriendo una crítica a la Concertación en el que era considerado -junto al éxito de la transición- uno de sus principales logros, éxito distintivo del país incluso a nivel internacional.

Bajo el gobierno de Bachelet se proyectó la imagen que la protección social, como sello de su administración, representaba un gasto social contra cíclico -necesario de aumentar en períodos de baja de la actividad económica- para proteger a los sectores más vulnerables en momentos económicos difíciles. Luego, a pesar de que el país contaba con una buena cuenta de ahorro, a pesar que se decidió utilizar tales recursos en políticas para los más desfavorecidos (en vez de incentivos al crecimiento, por ejemplo), a pesar de que se ignoró la máxima de no aumentar el gasto fiscal cuando disminuye el producto, la pobreza habría aumentado.

La Concertación respondió alegando que el levantamiento de la encuesta CASEN de 2009 coincidió con una aguda recesión económica, y por tanto, el aumento de la pobreza responde a tal tipo de causalidades³. Pero en 1998 la recesión fue más fuerte y no aumentó la pobreza. Kast, ministro de MIDEPLAN, centró la crítica en la ineficiencia de la administración anterior, insistiendo en la necesidad de focalizar más y mejor el gasto social, y avanzar hacia una política sustentada en transferencias monetarias y no en la prestación de servicios por parte del Estado.

1 Las cifras de indigencia están incluidas en el cálculo de pobreza.

2 Todas las cifras indicadas corresponden a estimaciones oficiales de MIDEPLAN.

3 La Nación, 27 de Agosto de 2010. Declaraciones de Bachelet en el Seminario "Desigualdad y Pobreza".

Más allá de discusiones y desplantes mediáticos mejores o peores, se trata de los mismos ejes que han articulado la política social estatal por varias décadas. Como paradigma que engloba tanto los bonos de Bachelet como el programa ChileSolidario de Lagos, la concepción de Estado subsidiario, que sustenta una política de gasto social focalizado, tiene su origen local en una doctrina que nace a mediados de los años setenta tras la búsqueda de un pinochetismo popular, en la ODEPLAN encabezada precisamente por el padre del actual ministro de MIDEPLAN. Aquél empeño de ir en contra de los viejos beneficios de la clase obrera y las capas medias burocráticas, que absorbían efectivamente gran parte del gasto social, levanta el discurso de los “verdaderos pobres” en contra de las clientelas desarrollistas. De ahí una importante identidad de los cuadros fundadores de la UDI tras un proyecto de nuevo clientelismo popular. Una doctrina que no se toca en el curso de transición a la democracia, naturalizándose así el ideario del Estado subsidiario.

Valga un comentario sociológico. Naturalización alude a la invisibilización del carácter social de un fenómeno. Implica su negación como hecho histórico, construido por la acción de los individuos; se presenta como algo dado, natural, imposible de ser alterado, más propio del orden de la naturaleza que de la sociedad. Fenómenos sociales naturalizados aparecen como igualmente inabordables para las ciencias sociales como el amanecer o la lluvia. En este caso, la política del gasto social focalizado se muestra imposible de alterar, toda política social asume su forma. Con varias décadas de aplicación indiscutida por parte de los actores políticos, tal naturalización termina siendo socialmente extendida.

Ha resultado vano revestir tal herencia autoritaria con una retórica socialdemócrata. La socialdemocracia se caracterizó por construir una noción universal de derechos, donde el Estado proveía de servicios a toda la población y no sólo a una porción de ésta, seleccionada con unos u otros criterios. Aquellos servicios -se esgrimía- contribuían no sólo a satisfacer las necesidades básicas, sino que además su carácter público permitía un control democrático de su orientación.

En el caso chileno, en notorio contraste regional, tal noción de derechos universales se ha negado gracias a la anotada naturalización del gasto social focalizado. Aunque no tanto por su revestimiento en una manida retórica socialdemócrata, que apela a la novedad de derechos antaño carentes de reconocimiento, como los de la mujer, las culturas originarias o las minorías sexuales. Más bien, su naturalización descansa en factores de apoliticismo y desarticulación social, herencia autoritaria que se ahonda en tiempos de democracia, al punto que nociones como la anotada convive con otros elementos de un imaginario marcadamente conservador que terminó por expresarse en contra de la propia Concertación.

De modo que, los antecedentes de este proceso, que revolotea en los fondos de la discusión sobre la pobreza, su medición y sus remedios, son de más larga data.

TODOS LOS LIBROS DE HISTORIA TIENEN PÁGINAS EN BLANCO: EL DE LA TRANSICIÓN NO ES LA EXCEPCIÓN

Habitualmente, el rótulo de *chicago-boys* se aplica a los principales arquitectos del modelo económico implantado bajo el autoritarismo militar, y se asocia a tecnocracias “apolíticas”. Huneus⁴ ha discutido en forma documentada tal imagen, mostrando cuán involucrados estuvieron aquellos equipos en el diseño político de la refundación autoritaria del país. Dado que los militares no cuentan con un programa ni orientación estratégica consensuada al momento del golpe de Estado, las posteriores reformas resultan expresión de una pugna entre distintos proyectos anidados en el nuevo bloque en el poder, cuya resolución sólo se avizora varios años después del *putch*. En esa tensión, Huneus releva el papel de ODEPLAN, como organismo que logra controlar la coordinación de las agencias estatales. Fundado bajo el gobierno de Frei Montalva, buscaba planificar el desarrollo económico y social del país. A raíz de la reducción del espacio ocupado por CORFO durante el período autoritario, ODEPLAN se proyecta como la incubadora de la nueva modalidad de Estado. En su formación gravita de modo fundamental el movimiento gremial de la Universidad Católica, a través de sus cuadros más destacados, lo que convierte a esta institución en la vía de ingreso de éstos a la disputa por la conducción del nuevo régimen.

El movimiento gremial se formó en las luchas estudiantiles de la reforma universitaria de los años sesenta y primeros setenta, aspirando a refundar un pensamiento de derecha cuyas expresiones partidarias tradicionales le resultaban desencajadas ante los términos de evolución del proceso social chileno, incluso en sus alcances sobre la propia elite chilena. Los cambios en la iglesia católica, sus centros educacionales, la propia radicalización de la Democracia Cristiana de la misma universidad y la creación de la Izquierda Cristiana y el MAPU, son expresiones de ello que impactan a este movimiento. Aunque se suele coincidir que su líder, Jaime Guzmán, hereda aspectos sustantivos del pensamiento de Alessandri, aspira no sólo a replantear el modo de enfrentar el ascenso de la izquierda en el país, sino mucho más que eso, a implantar una reforma que fuera más allá del desarrollismo estatal.

El gremialismo ocupó importantes cargos en la federación y los centros de estudiantes de la Universidad Católica (FEUC). Guzmán presidió el centro de alumnos de Derecho, al igual que Jovino Novoa. Miguel Kast -padre del actual ministro de MIDEPLAN- presidió el de de Economía y fue secretario general de la FEUC en 1970-1971. Hernán Larraín presidió Derecho y fue vicepresidente y presidente de la FEUC entre 1968 y 1970. Tras el golpe, Arturo Fontaine es designado presidente de la FEUC; le siguen Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick,

4 Huneus, C. (1998) “Tecnócratas y políticos en un régimen autoritario: los ‘ODEPLAN boys’ y los ‘gremialistas’ en el Chile de Pinochet”, en *Revista de Ciencia Política*, Vol. XIX, Santiago.

Jaime Orpis y otros conocidos dirigentes gremialistas. Varios nombres se repiten entre los principales responsables de ODEPLAN a inicios del gobierno militar. Miguel Kast, director del organismo, actúa como enlace entre éste, la corriente gremialista y la Universidad Católica. Esa conjunción de espacios deviene escuela de formación de profesionales y cuadros políticos, e involucra un sistema de becas que supera la imagen de pasantías a Chicago (da origen a la beca Presidente de la República para estudios de posgrado en el extranjero), convenios con la Universidad Católica y distintos organismos públicos y privados. Entre funcionarios directivos del organismo figuran Hernán Büchi, Julio Dittborn, Luis Larrain, Sergio Melnik, Hernán Álvarez y José Yuraszeck, entre otros. La institucionalidad naciente será clave para formar una orientación en las políticas sociales de corte populista, según Huneeus. Es la cuna del paradigma de la focalización del gasto social. Enfoques de eficiencia y eficacia se introducen a partir de un convenio entre el BID y ODEPLAN, y capacitan a profesionales del aparato estatal en la llamada “evaluación social de proyectos” que, como se sabe, resulta hasta hoy una suerte de código fuente para la programación de las políticas sociales, relevando las herramientas destinadas a detectar e intervenir la extrema pobreza. En la misma perspectiva se elabora la encuesta CASEN, como mecanismo técnicamente validado de seguimiento de las políticas públicas. Además, en ODEPLAN se preparan los borradores de las reformas al mercado de trabajo (conocido luego como Plan Piñera), a la previsión social (el concepto de capitalización individual se trabaja antes de los años ochenta) y a la salud.

Dada la relevancia de la entente ODEPLAN-gremialismo-Universidad Católica, Huneeus conmina a reemplazar el aforismo *chicago-boys* por *ODEPLAN-boys*, desmitificando su aura tecnocrática, vinculando aquella impronta desde el primer momento a un proyecto político refundacional de largas proyecciones y sin el cual el presente resulta inexplicable. De ahí lo absurdo de las recriminaciones al gobierno actual, tras el informe de Piñera el 21 de Mayo pasado, relativas a quién le robó a quién las ideas de políticas públicas. En definitiva, una discusión que elude la concepción de fondo y su origen.

PERO, ¿CRECIÓ O NO LA POBREZA?... ¡DEPENDE!

Hoy, el discurso tecnocrático instala con fuerza la idea que el motor fundamental para derrotar la pobreza reside en el crecimiento económico y no en las políticas sociales. El Mercurio, además de apoyar la tesis de la focalización y la mejor eficiencia en los programas sociales⁵, llama a concentrarse en retomar la senda del crecimiento⁶, en una línea que incluso más recientemente abraza

5 Ver editorial del 19 de Julio de 2010: *Revisión de los programas sociales*.

6 El Mercurio, editorial de 18 de Julio de 2010: *El crecimiento económico es la clave para superar la pobreza*.

parte de la agenda regulatoria que se debate dentro del gobierno como condición necesaria para un mercado más competitivo, tras la imagen de un capitalismo más moderno -menos rentista y cortoplacista- que pueda inaugurar un ciclo de crecimiento prolongado⁷, y alcanzar el ansiado desarrollo.

Se instalan dos centralidades, crecimiento y focalización, que articulan la mayor parte del debate. Sobre este último eje, la discusión se centra en el cálculo de la cifra misma. En noviembre, la CEPAL lanza su propia estimación, del 11,5% -empleando los datos de la misma CASEN 2009-, varios puntos debajo del cálculo de MIDEPLAN. Las reacciones no tardan. Lagos apunta que “*la cifra correcta fue la que dio a conocer la CEPAL, la pregunta que uno se hace es por qué el gobierno decidió cambiar la metodología*”⁸. Kast replica: “*quisiera dejar muy claro que utilizamos el mismo termómetro que hemos ocupado durante 20 años y que también ocupó el ex Presidente Lagos en su mandato*”⁹. Y así sigue.

La diferencia está en el peso otorgado a los alimentos en la canasta básica¹⁰. La CEPAL les asignó una menor ponderación, argumentando su aumento de precio; sin limitarse a Chile, tal criterio ya se utilizó en 2008 para el conjunto de países que la entidad analiza. Como se ha señalado¹¹, el alza de la canasta usada por MIDEPLAN -de \$47.099 en 2006 a \$64.134 en 2009- es el motivo inmediato del aumento de la cifra de pobreza, dada la carestía de los alimentos en el período. En el mismo sentido, se señala que la pura estabilización en el precio de los alimentos debiera arrojar una pobreza de un dígito en la próxima medición¹².

Para tener una idea de los alcances prácticos de esta discusión, téngase en cuenta que la diferencia entre CEPAL y MIDEPLAN bordea los \$8.000 en el valor de la canasta. Entre la población urbana (87% del total), esta diferencia implica que alrededor de medio millón de personas se agreguen o resten de la condición de pobreza. Peor aún, si se considera a nivel urbano una canasta básica de \$80.000, superior a la oficial en \$15.866 -unos \$530 diarios, equivalentes a un pasaje de Transantiago- ingresan alrededor de 1.150.000 personas más a la cifra de pobreza, empujándose ésta al 23,3% (3.430.000 personas). Al revés, si se asume una canasta de \$50.000, casi un millón de chilenos (987.000) debiera restarse de la consideración oficial de pobreza a nivel urbano, llegando tal registro a un 8,8%¹³.

7 El Mercurio, editorial del 4 de Diciembre de 2010: *Un sistema financiero competitivo*.

8 Canal 13, 2 de Diciembre de 2010.

9 Diario Estrategia, 2 de Diciembre de 2010. [en digital] Disponible en: http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=35392

10 La línea de ingreso demarcatoria de la pobreza se calcula en base al valor de una canasta básica que incluye un stock alimentario -calorías, vitaminas y proteínas básicas- y una serie de necesidades no alimentarias consideradas fundamentales.

11 Ver entrevista a Eduardo Engel de La Tercera, 29 de Agosto de 2010. También *Cuatro visiones sobre el quiebre de tendencia*, La Tercera, 14 de Julio de 2010.

12 Ídem.

13 Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009. La pobreza a nivel urbano es de

La relevancia del debate metodológico estriba en la alta incidencia que tiene en el cálculo de la pobreza. Como vimos, una pequeña variación en el precio de la canasta acarrea un cambio sustantivo el número de personas consideradas en la categoría. Si un criterio diferenciador basado en el ingreso, opera con tal margen de variación extrema cuando se altera en forma leve, es porque se aplica, entonces, a una zona de la sociedad que presenta una distribución considerablemente uniforme del ingreso, por lo cual, la situación a uno y otro lado de los márgenes de pobreza empleados es bastante similar. Como se sabe, además, entre uno y otro lado de la línea de pobreza existe una alta rotación. El Instituto Libertad y Desarrollo, en base a datos de la Encuesta Panel CASEN -cuyo registro se inicia en 1996-, concluyó que hay una alta movilidad entre la condición pobre y no-pobre. De los 810.000 indigentes que había en 1996, un 78% dejó de serlo en 2001. Empero 646.000 personas que no eran indigentes cayeron en tal condición en el mismo lapso. La principal razón es que unos perdieron el trabajo, mientras otros encontraron uno. De tal suerte, entre 1996 y 2000, 4.828.000 personas pasaron por la pobreza, lo que equivale al 32% de la población¹⁴.

En definitiva, la línea de pobreza no representa un corte social sustantivo. No distingue un grupo claramente diferenciable ni consistente en el tiempo. Más bien clasifica de uno y otro lado a una población relativamente homogénea. Se trata en realidad de una activa puerta giratoria, cuyos motivos de rotación reciben, en cambio, menor atención. O sea, se trata de contar una pobreza estadística, más que analizar cómo se produce y reproduce la pobreza.

De ahí que la principal categoría que sigue, por encima de ésta en la pirámide social, no se componga abierta y claramente por los “trabajadores de a pie” (clase obrera o “clase baja”), sino directamente por los segmentos bajos de los estratos medios. Claro, la homogeneidad del ingreso en la zona circundante a la brecha de pobreza no da cuenta de un salario bajo promedio, sino al contrario. Comparada con Argentina, nuestra canasta básica resulta llamativamente alta (133,87 versus 85,8 dólares¹⁵, un 37% menos que la canasta básica chilena). Es que la nuestra es una pobreza menos pobre, en general, a nivel regional, dada el alza sostenida en el ingreso de las últimas décadas. La relación entre pobreza y sectores medios se analiza en un reciente estudio de la OCDE¹⁶. Se plantea que en Chile no son dos

15,5% según la cifra oficial de MIDEPLAN.

14 Larraín, L. (2002) *Nuevo Mapa de la Pobreza*, LyD. Ver también *Movilidad de la pobreza en Chile*, escrito en 2001 por el actual ministro de MIDEPLAN Felipe Kast, en LyD.

15 Tomando en consideración el segundo semestre de 2009, mismo período del levantamiento de la encuesta CASEN de 2009.

16 OCDE (2010) *Perspectivas económicas de América Latina. En qué medida es clase media América Latina*.

realidades sociales nítidamente diferenciadas. Con sectores medios estimados en un distintivo 49% de la población –la principal categoría de la sociedad chilena-, se alcanzan a la vez los más altos índices de probabilidad que individuos de dicho sector caigan en condición de pobreza. “*Lo que quizá resulte más sorprendente es que los estratos medios bajos chilenos sean los menos resistentes -léase capaces de mantener su posición social- de todos los países considerados, ya que son los que más cerca se encuentran del umbral que los separa de los desfavorecidos*”.¹⁷ Agrega además: “*Esto podría ser reflejo del destacado éxito de Chile en la reducción de la pobreza durante los dos últimos decenios: como resultado de ello, existe un número desproporcionadamente elevado de hogares de los estratos medios bajos justo por encima del 50% del ingreso mediano y, en consecuencia, según nuestra medición, cerca de volver a caer en la categoría desfavorecida*.”¹⁸

O sea, la zona de riesgo de la pobreza llega a golpear las puertas de los grupos medios. De ahí el escaso sentido de la discusión, reducida a un corte estadísticamente exacto pero irrelevante socialmente. El fenómeno, a todas luces, es otro: la marcada homogenización hacia abajo en la distribución del ingreso. Claro, dicho debate importa en la medida que las políticas sociales vigentes se rigen por los criterios de focalización anotados. Luego, más que indagar sobre la pobreza real, como fenómeno social, contabiliza individuos que resultarán beneficiados por asignaciones específicas, al tiempo que excluye a muchos otros -a pesar que su situación resulta equivalente- de tal atención estatal.

El mismo informe de la OCDE señala que la acción del Estado “*beneficia sobre todo a los hogares desfavorecidos de la región. Para los estratos medios, la situación es mucho menos clara. Lo que abonan en impuestos es casi equivalente al gasto público que reciben. El decil medio de Chile satisface en promedio impuestos por un valor del 18.3% de su renta disponible y recibe prestaciones que representan un 20.6% (...) Como resultado de lo anterior, si la educación, la asistencia sanitaria y otros servicios públicos carecen de calidad, los estratos medios serán más propensos a considerarse perdedores en materia fiscal y menos proclives a contribuir al financiamiento del sector público. La percepción de una inadecuada calidad de los servicios públicos, tales como la educación o la asistencia sanitaria, induce a los estratos medios a buscar alternativas en el sector privado, aun cuando ese coste extraordinario implique una significativa presión adicional sobre los presupuestos familiares*.”¹⁹

En ausencia de una noción de derechos sociales universales, la focalización diferencia entre aquellos que legítimamente pueden aspirar a la asistencia estatal y los que deben recurrir al mercado para satisfacer sus necesidades. El dilema

17 Ídem, p. 19.

18 Ídem, p. 74.

19 Ídem, pp. 24-25.

estriba en el hecho de que tal segmentación se aplica a una amplia franja de la población de condiciones de vida más bien homogéneas, con lo cual otorga y quita derechos sobre individuos cuyos problemas no difieren gran cosa.

Es que la variación sustantiva en la distribución del ingreso no se ubica en la parte baja de la estructura social. Como se sabe, tal distribución se presenta usualmente en divisiones proporcionales de quintiles²⁰. Así, se puede apreciar en el siguiente gráfico, elaborado con los datos de CASEN 2009, que la pendiente de ingresos monetarios -o sea, incluidos subsidios estatales- por quintiles, recién se empina hacia arriba en el 20% más rico.



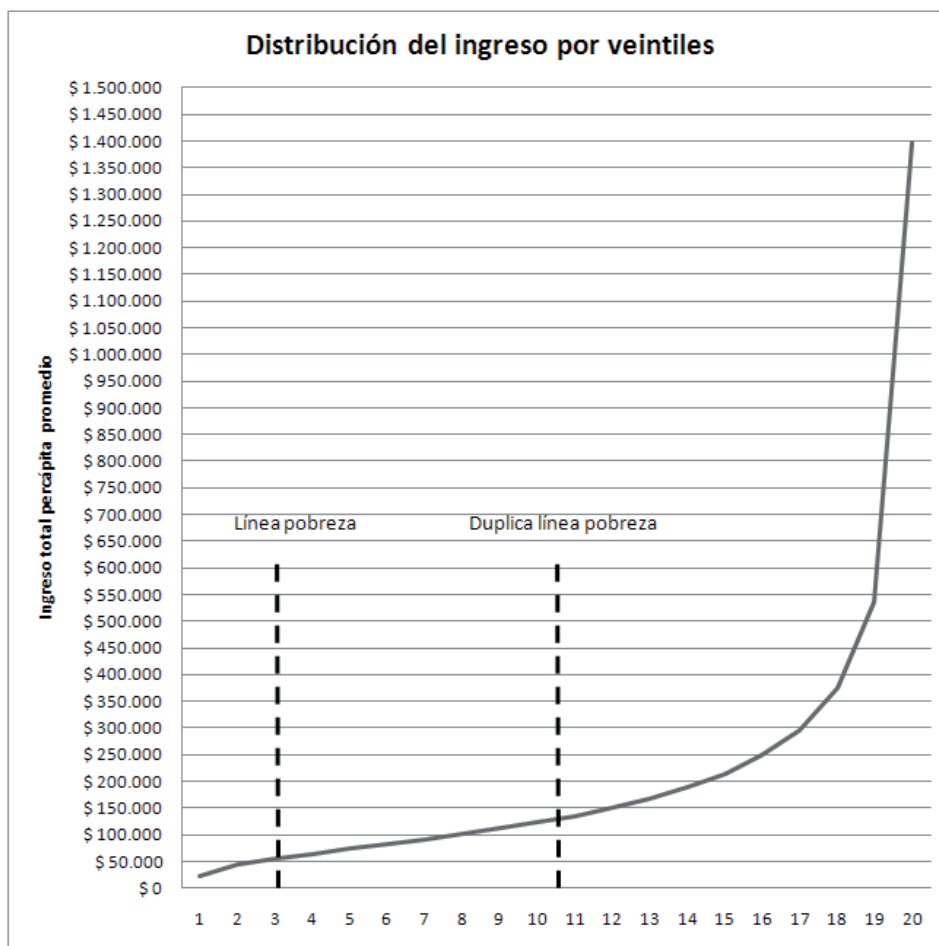
Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009.

Empero, aun así, tal retrato de la sociedad chilena -que corresponde a su presentación más usual- no transparenta rasgos sociales de gran relevancia. Veamos. Si distribuimos el mismo registro empírico de la CASEN 2009 en divisiones de población más desagregadas, específicamente veintiles²¹, entonces resulta evidente que no es “el 20% más rico” de la población quien concentra los mayores ingresos en forma distintiva. Más bien, ese “quintil más rico” resulta

20 Segmentos equivalentes al 20% de la población, organizados de menor a mayor según ingreso monetario promedio.

21 Un ejercicio análogo al anterior, considerando esta vez segmentos del 5% de la población. Los tramos del eje de ingresos se mantienen constantes en ambas figuras para facilitar la interpretación. La diferencia de altura de la curva expresa el aumento de la concentración del ingreso cuando se pasa de quintiles a veintiles.

tremendamente heterogéneo. Al punto que, en realidad, es a partir del 5% más rico de población donde la curva, efectivamente, se dispara hacia niveles de ingreso distintivamente más altos que los existentes en el resto de la sociedad. El gráfico siguiente, elaborado en base a los mismos datos oficiales, muestra en las líneas verticales el corte de pobreza oficial (que afecta al 15,1% de la población) y luego la zona donde se duplica dicho ingreso de pobreza. Como se puede apreciar, tal línea de pobreza recién se dobla sobre la mitad de la población (sobre el veintil 10), lo que da cuenta de la fuerte homogenización -recién anotada- de las condiciones de vida de la mayoría de los chilenos.



Fuente: elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2009.

La discusión sobre la línea de pobreza, entonces, debe reemplazarse por una referida a la fisonomía y el carácter de la desigualdad. Aunque la sociedad chile-

na ha sido siempre desigual, la curva de distribución de los ingresos se distingue hoy por esa acentuada e inédita concentración del ingreso que refleja.

DESIGUALDAD CRECIENTE E INDEFENSIÓN DEL INDIVIDUO

Con excepción de lapsos cortos, en las últimas dos décadas tienden a producirse, en forma paralela y sostenida, dos fenómenos tan sólo en apariencia contradictorios: la disminución de la pobreza y el aumento de la desigualdad. ¿La razón de ello? Crecen los ingresos en la sociedad en general, pero en grados muy distintos según el sector de que se trate.

Una estrecha minoría ve aumentar su participación en la riqueza total con mayor celeridad, a tal punto, que dicha condición la distingue a nivel latinoamericano. La Tercera presentó algunos hallazgos de un reciente estudio de The Boston Consulting Group (BCG), entidad que analizó aquel borde de la sociedad donde no llegan las encuestas oficiales: ese 5% más rico de las familias chilenas antes señalado²². Éstas cuentan con activos líquidos -dinero en el banco- para invertir por más de \$50.000.000, y han venido creciendo en número a una tasa del 259% entre 2004 y 2010; la más alta de América Latina. Pero incluso los más ricos repiten el mismo patrón de concentración del resto de la sociedad chilena: una gran mayoría entre éstos disfruta de una porción reducida de los beneficios que suma este sector de la sociedad. BCG estima que 181.000 familias poseen activos ubicados entre los US\$100.000 y US\$250.000 (unos 48 y 120 millones de pesos chilenos aproximadamente). Y continúa desagregando: sobre éstas, 7.348 familias son millonarias en dólares (sobre 480 millones de pesos chilenos); 300 familias superan los 20 millones de dólares en activos líquidos (9.600 millones de pesos); y 29 familias tienen el mismo tipo de activos por sobre los 100 millones de dólares (más de 48.000 millones de pesos chilenos).

La misma consultora internacional apunta que un aspecto clave en la constitución de estas fortunas -sobre todos aquellas de reciente data- es el sistema previsional de AFPs. Personas con ingresos muy altos pueden pagar organismos especializados para administrar sus fondos, alcanzando enormes rentabilidades. De modo que el modelo de capitalización individual vigente contribuye a aumentar la concentración del ingreso, incrementando en ese sentido la desigualdad existente en la sociedad.

En contraste con ello, esa misma privatización de las condiciones de vida ha tendido a homogenizar hacia abajo las situaciones sociales, introduciendo una gran dosis de inestabilidad en dichas posiciones sociales²³. Además de acrecentar

22 *Los altos patrimonios en Chile crecen más fuerte en la base de la pirámide*, La Tercera, 29 de Agosto de 2010.

23 Ver Ruiz, C. (2005) "¿Habrà crecimiento con igualdad hacia el bicentenario?" en *Análisis del año 2004*, Departamento de Sociología, Universidad de Chile.

la desigualdad en la sociedad chilena, la ausencia de derechos sociales universales expulsa del ámbito de las certezas muchos aspectos de la reproducción cotidiana, tornando ésta más indeterminada y ajena a condiciones de predictibilidad acostumbradas. Tal incertidumbre, suficientemente estudiada²⁴, representa en definitiva la versión criolla de la mentada “sociedad del riesgo”, signada por la soledad del individuo ante la indeterminación de sus propias condiciones de existencia²⁵. Un cambio que, como en otras épocas, llega a alterar los códigos de la vida cotidiana misma. Pues el aspecto más relevante del orden cotidiano es la producción y reproducción de las certezas básicas, sin las cuales no sabríamos discernir las nuevas situaciones ni decidir qué hacer. Luego, representa un ámbito fundamental de la seguridad para enfrentar los riesgos de una vida no prede-terminada. Precisamente, una de los rasgos del capitalismo, en sus inicios, es la valoración que abre de la vida cotidiana como espacio de realización personal; la inclusión en lo mundano de aspectos antes considerados objeto de regulación religiosa o ajenos al disfrute humano. Más adelante, con el Estado de Bienestar, muchos aspectos antes considerados parte del mundo privado devienen objeto de regulación estatal. Aparte de las condiciones de trabajo y la economía, el divorcio y el aborto, el fomento del deporte y el “buen hogar” devienen asuntos públicos incorporados al debate político y los circuitos de comunicación masiva. Aquello erigió una relación entre vida cotidiana y certeza, marcada por un ideario de derechos sociales que aseguraba al individuo, por el sólo hecho de ser miembro de la comunidad, un tipo de asistencia que constituye parte fundamental de las certezas que le permiten estructurar la vida cotidiana.

Uno de los efectos más hondos del anotado proceso de privatización de las condiciones de vida, y su consiguiente dismantelamiento de antiguos sistemas de protección social, estriba, más allá de aquella dimensión económica usualmente apuntada, en la medida que altera las condiciones culturales de desenvolvimiento de la vida cotidiana. Se trata de un cambio que, nuevamente, en la experiencia chilena alcanza una hondura inusual para el resto de los países latinoamericanos. En el actual panorama, se naturaliza el hecho que recaiga sobre la capacidad de pago de los individuos una enorme proporción del costo de sus procesos de reproducción social. Se trata de un hecho que reduce la amplitud y riqueza de los vínculos con la sociedad, especialmente en el plano de la construcción de certezas con las cuales enfrentar tales acrecentados desafíos y, como tal, certezas básicas con las cuales erigir algún grado de predictibilidad acerca del futuro. Las cambiantes condiciones antes anotadas, ponen al individuo ante una vida cotidiana más volátil, que no se controla, que escurre y se escapa. Conforme las

24 Al respecto pueden consultarse la serie de investigaciones del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) sobre la sociedad chilena, en particular su informe de 1998.

25 Ruiz, op. cit.

proyecciones se hacen más difíciles, el tiempo corto se estira, al punto que se tiende a vivir el momento, petrificando el presente.

Son cambios que tienen un profundo impacto en la vida social. El desmantelamiento del modelo tradicional de familia, incluso la contracción de la tasa de natalidad, no son ajenos a ello. Un estudio de la Universidad Católica indica que la tasa de natalidad entre 1990 y 2004 baja considerablemente (21,2%) excepto entre mujeres de 10 a 14 años y 35 a 44 años²⁶, o sea, edades lejanas a la ideal -en términos médicos- para la reproducción (20 a 34 años). Esto supone el aumento de situaciones de embarazo no deseado y la postergación de la natalidad. La expansión de los anticonceptivos o la creciente incorporación de la mujer al trabajo, no aparecen tanto como causantes independientes de lo anterior, sino productos del cambio más general de la vida social antes consignado, y las nuevas estrategias, cada vez más individuales, para enfrentarla. No es casual que se alegue como impedimento principal para una natalidad más temprana el “*costo de formar hijos, en especial educacional*”²⁷. No es casual, tampoco, que tal caída de la tasa de natalidad aparezca como un rasgo marcado de los sectores medios y medios bajos; al punto que, si de los grupos medios dependiera, la reproducción de la sociedad chilena se encontraría amenazada. El miedo a la pobreza y la íntima convicción de la precariedad de la posición conseguida (sobre todo durante la edad médica “óptima” para el embarazo), ha llevado a los sectores medios tanto a posponer sus expectativas de formar familia, como a disminuir el número de hijos.

UNA VISTA AL PANORAMA SOCIAL TRAS LA DESIGUALDAD

Vista desde la desigualdad y el impacto de la privatización de las condiciones de vida, la discusión actual del corte de pobreza muestra la distancia que adopta el debate público de aspectos sustantivos del panorama social actual, en especial sobre las nuevas diferencias sociales. El señalamiento reiterado de la brecha existente entre la esfera de la política y la vida cotidiana es, precisamente, reflejo de esto. Es que los distintos sectores sociales, y los mecanismos de diferenciación que tienden a delimitarlos, han cambiado en importante grado. Por cierto, la anotada homogenización esconde un heterogéneo panorama social, que expresa distintas posiciones y estrategias seguidas para reproducir o intentar superar tales posiciones sociales, albergando una diversidad de modos de vida.

Distintos grupos de individuos, a veces más articulados, las más de las veces no, conquistan espacios de mayor o menor riqueza, poder y reconocimiento, en

26 Ver Donoso, E., Carvajal, C., Domínguez, M. A. (2009) *Reducción de la fecundidad y envejecimiento de la población de mujeres en chilenas en edad fértil 1990-2004*, Facultad de Medicina, Universidad Católica, Santiago.

27 Ídem.

un proceso social que cobija diversas “estrategias de movilidad”, así como de defensa de las conquistas obtenidas. De tal modo, tales estrategias suelen incorporar mecanismos materiales y culturales de “cierre social” hacia abajo, capaces de impedir el acceso de grupos más desfavorecidos a las posiciones logradas. La “reproducción social” de una determinada posición conlleva dispositivos de cierre, orientados a cautelar el grado de exclusividad que comporte la posición social en cuestión.

Las curvas antes graficadas de desigualdad en la distribución del ingreso son, en este sentido, expresivas de relaciones de fuerza de carácter social que se establecen en un momento dado en la sociedad. De ahí que una aproximación meramente económica al problema de la estratificación no baste para alcanzar una comprensión adecuada de la complejidad que, en cada etapa histórica, adopta el panorama social. No se trata sólo de identificar la capacidad de pago -elemento vital en la vida de los sujetos, como hemos visto- sino las condiciones sociales que generan y diferencian unas y otras capacidades de pago. Y ellas expresan, a fin de cuentas, una distribución desigual del poder.

LA ELITE: NO BASTA EL DINERO

Como se dijo, incluso entre los ricos la concentración es alta. En 2004, sólo 27 empresas concentraban el 50% del valor total de las exportaciones. De éstas, las 10 principales concentraban el 35.3%. Para ahorrar detalles²⁸: sólo 16 grupos económicos explicaban el 80% del PIB. Aquellos sectores de la economía en que impera una alta concentración -que no son pocos- representan un “mercado” anómalo, marcado por la llamada competencia imperfecta. El alto grado de privatización de antiguos monopolios estatales sobre importantes servicios y rubros económicos, ha resultado especialmente estimulante de este fenómeno en la economía chilena. De ahí que no ha de extrañar la colusión de grandes grupos económicos, al punto de poner en duda los supuestos beneficios que la competencia acarrea para la sociedad en general. Y este año no ha sido excepción en este sentido. Hace poco el propio Longueira llamaba la atención sobre los grados que alcanza el fenómeno por estos lares: “*si el Tribunal de la Libre Competencia aprueba la fusión láctea de Soprole y Nestlé, sugiero que le cambiemos el nombre por Tribunal de la Libre Concentración*”²⁹, agregando que no aprecia en

28 “*Dos empresas controlan el 54.3% del mercado de los supermercados, una sola controla el 78% del mercado del azúcar, una sola capta el 75% del mercado de la telefonía fija, sólo dos empresas controlan casi el 70% del negocio de la generación eléctrica, una detenta el 75% del mercado de detergentes, una sola el 89% del negocio de las cervezas, una empresa tiene el 88% del mercado de tráfico aéreo de carga y el 70% de pasajeros, una sola el 98% del mercado de cigarrillos, etc.*” Ruiz, C. (2005) “¿Habrá crecimiento con igualdad hacia el Bicentenario?” en *Análisis del año 2004*, Dpto. de Sociología, Universidad de Chile, p 46.

29 Carta al Director de El Mercurio, Senador Pablo Longueira, 2 de Diciembre de 2010.

ello “*algún argumento para que los chilenos nos veamos beneficiados*”³⁰. Y no es que haya perdido la fe en el capitalismo. Al contrario. Desde hace un tiempo viene creciendo en la derecha chilena, no sin tropiezos, una preocupación por la medida en que esta cuestión afecta el crecimiento y la productividad. Los efectos negativos de este fenómeno para el propio desarrollo capitalista, han sido largamente advertidos. El propio Adam Smith apuntó que la concentración del poder económico “*es a la sociedad económica lo que el despotismo a la sociedad política*”.

El daño que la concentración puede inferir al modelo es mayor cuando se da en sectores de bajo valor agregado, como el financiero o el primario-exportador. El acomodamiento a escenarios de ganancia fácil donde hay escaso desarrollo de las fuerzas productivas, a nichos de acumulación regulada carentes de cualquier estímulo a la innovación y una mayor calificación del trabajo, es difícil de superar porque equivale a desarmar un mundo de privilegios cautivos. En la medida que se trata de mercados de escasa competencia, los códigos de acceso a tales posiciones de privilegio también difieren de situaciones de competencia abierta. Prima entonces la capacidad política de presión para garantizar la renta. Se trata de un tipo de sujeto cuya posición social no se constituye plenamente en un mercado propiamente tal; y sus mecanismos de reproducción social apuntarán lógicamente a defender dicho sitio con herramientas extraeconómicas, escasamente atadas a lógicas auténticas de mercado.

Por su destrucción de los privilegios del Antiguo Régimen, al avance del mercado se le atribuye, en los inicios del capitalismo, un efecto democratizador sobre las relaciones sociales. Empero, tendencias como la antes señalada apuntan exactamente en la dirección contraria, apuntando más bien, mecanismos de reproducción elitarios reñidos con las promesas del liberalismo económico. De ahí la configuración de endogámicas redes exclusivas en torno a ciertas órdenes religiosas, clubes sociales, colegios, barrios, universidades, estilos de vida, tipos de consumo, lenguajes; un intrincado muro social que apela a mecanismos de cierre de carácter estamental y tradicional. Lo que, en definitiva, dificulta tanto la renovación de la propia élite como la conquista de lugares de mayor privilegio para los sectores medios y medio altos. De ahí un malestar arropado en el discurso de la meritocracia, que en las últimas décadas alcanza importante eco en nuestro país.

APERTURAS Y CIERRES A LOS QUE APELA EL RÉGIMEN DEL MÉRITO

Los sectores medios son la categoría social que más crece en Chile durante

30 Longueira y alianza Soprole-Nestlé: “*Tarde o temprano estas fusiones adquieren conductas monopólicas*”, La Segunda, 3 de Diciembre de 2010.

los últimos veinte años³¹. Entre 1971 y 2009, los sectores medios asalariados pasaron del 18,4% de la población económicamente activa al 29,7% de ésta, transformándose en la categoría social de mayor participación relativa en la sociedad. Mientras que los sectores medios independientes mantienen y hasta disminuyen ligeramente su peso en la misma, de 7,8% a 7,4%. La clase obrera industrial y de la construcción -a inicios de los años setenta el segmento más grande del empleo- cae de un 25,8% a 10,1% en el período en cuestión.

En los crecidos sectores medios se impone en forma indiscutida una burocracia asalariada de servicios privados moderna (mientras la burocracia estatal descende del 8,6% al 7,2% de la PEA³² entre 1980 y 2009, los asalariados privados acrecientan su peso de un 11,7% hasta un 22,6% en igual lapso), lo que da lugar al predominio históricamente inédito de una combinación del carácter asalariado y privado preponderante en estos sectores. A su vez, dentro de ello, las fracciones medias y altas resultan las más expansivas en los últimos tres lustros, marcadas por el sostenido crecimiento de los grupos profesionales. El registro en cuestión permite advertir, además, la enorme heterogeneidad derivada del crecido volumen de nuevas incorporaciones, propias de su marcado crecimiento reciente. Tal hecho indica que, una parte significativa de esta burocracia privada moderna, se constituye a partir de fracciones de “clase media” de primera generación, lo cual acentúa su heterogeneidad.

Por otro lado, ello contrasta con la pérdida de peso y significación relativa dentro de los sectores medios tanto de la llamada pequeña burguesía como de los grupos medios asalariados ligados al empleo público, marcando así una fisonomía claramente distintiva de toda tradición histórica anterior, en la que éstos últimos resultaban más relevantes. De aquí, entonces, la configuración de unos nuevos sectores medios, de significación mayoritaria en la sociedad, a la vez que inédita fisonomía.

Queda en entredicho el mito de Chile como país de emprendedores. En realidad hay un descenso en las ocupaciones independientes y de la participación relativa de la llamada pequeña burguesía entre los sectores medios actuales. Aquello, más allá del cambio en la estructura ocupacional que expresa, da cuenta de un retroceso de la viabilidad de estrategias de emprendimiento como mecanismo de acceso o reproducción de una posición de cierto privilegio. La concentración económica tiene aquí su efecto, haciendo difícil el sueño del emprendimiento. Al estudiar el mundo de la pequeña y mediana empresa en Chile, Goldfarb ha señalado que uno de los rasgos principales de la política económica

31 Ruiz, C. y Boccardo, G. (2010) *Panorama actual de la estructura social chilena (en la perspectiva de la transformación reciente)*, Documento de Trabajo CIES, Universidad de Chile, Santiago.

32 Población económicamente activa.

de los gobiernos de la Concertación tras la crisis de 1998 estriba en haber sellado un pacto con los mayores grupos económicos -en particular, los bancos- que permite trasladar hacia las empresas menores los costos de la recesión³³. A partir de ese momento, apunta Goldfarb, las condiciones de desarrollo de la PYME se reducen drásticamente, lo que contribuye a su reducción en el la zona media de la estructura social.

El grueso de los sectores medios presenta un carácter asalariado. En éstos, los segmentos que han crecido más aceleradamente son aquellos de calificaciones formales medias y altas. Parece ser la educación, la acumulación de capital educativo habilitante para mejores empleos, la estrategia más efectiva para conquistar una posición ventajosa. Aquello se expresa como instalación de una suerte de cultura del logro educacional, distintiva de estos sectores. Levanta entonces el credencialismo como discurso de legitimación, al tiempo que de cierre, de dichas posiciones sociales. Así, mientras la demanda en nombre de la meritocracia busca abrir espacios en una elite cuyos méritos resultan escasamente puestos a prueba en condiciones caracterizadas por la “igualdad de oportunidades”, busca legitimar también la posición alcanzada ante aquellos sectores que carecen de tales calificaciones. El discurso del logro educacional alcanza, de este modo, una considerable propagación en la sociedad, de la mano de la sostenida expansión de estos sectores. De modo que, aquello que a menudo se interpreta como una apertura hacia mayores grados de igualdad, tiene alcances bien precisos. Especialmente los nuevos profesionales suelen aparecer como un grupo que pugna por una sociedad más equitativa, empero, si bien apuntan efectivamente a patrones de estratificación más abiertos, al igual que otros grupos -como el empresariado y la propia clase obrera, históricamente- en este caso también trazan límites para tal apertura, sobre todo hacia abajo.

Así, la idea de la meritocracia también lleva a cerrar hacia abajo lo que busca abrir hacia arriba. Como se sabe, el logro educacional expresa la situación económica, social y cultural de origen, lo que impide que la estrategia educacional sea viable para la mayoría. De ahí que Goldthorpe, uno de los investigadores más destacados en el estudio de los llamados nuevos sectores medios, sea escéptico de tales imágenes. *“Cabe esperar, a menos que se identifiquen influencias en contrario muy poderosas, que estos empleados -profesionales y directivos- actúen en lo principal de la manera que les es característica a los miembros de los estratos privilegiados: es decir, que tratarán de utilizar sus superiores recursos para preservar sus posiciones de relativo poder y ventaja social para sí mismos y para sus hijos. En realidad, debería resultar bastante claro que la ideología legitimadora a la que en primer lugar acudirían en una situación de conflicto redistributivo es la ‘meritocracia’ (...) los argumentos meritocráticos constituirían*

33 Ver: Goldfarb, E. (2007) *No todo está perdido, la encrucijada de las pymes y de la clase media*, Tajamar, Santiago.

la base de la resistencia ofrecida por la clase de servicio -profesionales y directivos- frente a una mayor equidad redistributiva”³⁴.

TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y LA ESQUIVA COMPETENCIA

Como se apuntó arriba, hoy la mayor parte de los sectores medios en Chile detentan un carácter asalariado, contrariando la imagen de una suerte de condición emprendedora como principal categoría intermedia de la sociedad. Por lo demás, el total de la población contratada por la PYME ha tendido a disminuir. La mismas encuestas CASEN indican que entre 1992 y 2006 el empleo en unidades productivas de 2 a 5 personas cayó de 20,3% a 16,2% de la PEA, mientras que el segmento de 6 a 9 personas bajó incluso con más fuerza (8% a 4,5%). Por su parte, el trabajo por cuenta propia cae de un 22,9% en 1990 a un 20,3% de los ocupados en 2006, según el mismo registro³⁵.

Pero la disminución del trabajo independiente y de la capacidad de contratación de la PYME no es el único cambio que presenta este sector. Virtualmente, la mitad de empleadores y trabajadores por cuenta propia de la Región Metropolitana declara haber tenido sólo un cliente o proveedor en el último mes³⁶. Es decir, uno de cada dos trabajadores independientes o empleadores pequeños o medianos se encuentra encadenado a otra unidad económica, la cual, suele ser la matriz de grandes empresas. Tal dependencia de un único actor, tanto en la cadena de provisión como de ventas –incluso, a veces en ambas- limita en forma considerable las posibilidades de desarrollo de un negocio, y como tal, la atribución de un carácter plenamente “independiente” y ligado a una auténtica situación de mercado, a tal condición. Al contrario, obliga a la unidad económica más débil a someterse a los ritmos de la unidad de mayor solvencia, y abre la posibilidad a ésta última de externalizar procesos otrora internos, tras la expectativa de un mayor ahorro de costos.

Quienes detentan menor capacidad de negociación en el intercambio, suelen depender de un único cliente o proveedor y exhiben ingresos más bajos que aquellos que acceden a situaciones de mercado (caracterizadas por la presencia de más de un cliente y más de un proveedor)³⁷. Pero aquí no acaban las diferencias que cobija esta agrupación tradicional que, como se aprecia, resulta cada vez más inoperante en la actualidad. Considerando aspectos subjetivos, ambos grupos difieren respecto al papel que debe desempeñar el Estado en la economía. Los

34 Goldthorpe, J. H. (1982) “Sobre la clase de servicio, su formación y su futuro”, en *Revista Zona Abierta* 59/60, 1992, Madrid, pp 254-257.

35 Comparaciones obtenidas a partir de las series de datos oficiales de encuestas CASEN.

36 Datos de encuesta metropolitana CIES de 2009.

37 Mientras que para los primeros el ingreso promedio va de \$150.000 a \$250.000 mensual, entre los últimos fluctúa entre \$250.000 y \$500.000, según datos de la misma encuesta metropolitana del CIES.

independientes y empleadores en situación de competencia presentan opiniones consistentes con la imagen de la pequeña burguesía: sólo el 36,9% se declara muy de acuerdo con la idea que el Estado sea dueño las industrias y empresas más importantes del país. En cambio, tal indicador se empina sobre el 50% en el caso de los encadenados³⁸. De modo que, éstos últimos se alejan tanto en sus condiciones objetivas como en aspectos subjetivos de la tradicional figura del pequeño empresario.

Ello agrega más dudas sobre la manida imagen de Chile como un país de emprendedores. No sólo tal estrategia resulta más difícil producto de la concentración económica, sino que la proliferación de nuevas formas de intercambio desdibuja en muchos aspectos el carácter independiente del trabajo en cuestión. Un negocio que depende de un sólo proveedor y/o cliente para existir, difícilmente puede ser clasificado como una actividad independiente. Sin embargo, esta es la realidad de gran parte de las posiciones que, dados los mecanismos de clasificación tradicionales, aún se consideran independientes en términos ocupacionales. En lugar de ello, esto revela la existencia de nuevas condiciones para el desarrollo de dicha estrategia, que limitan fuertemente sus posibilidades de expansión y la consolidación de mejores posiciones sociales.

CAMBIOS EN EL MUNDO DEL TRABAJO Y DERECHOS LABORALES

El debilitamiento del carácter independiente del trabajo por cuenta propia, coincide con otro cambio que contribuye a transfigurar la antigua fisonomía del mundo del trabajo en Chile, planteando desafíos analíticos que las viejas categorías no logran aprehender en modo suficiente. Se trata de un debilitamiento similar, esta vez, de la condición dependiente en el trabajo asalariado. De modo que, lo que constituía una distinción fundamental para comprender el empleo -entre trabajo dependiente e independiente- hoy ya no lo es tanto. Los cambios en la economía de los últimos años -en especial en la gestión de los recursos humanos-, la flexibilización del mercado laboral, las transformaciones tecnológicas, entre otros procesos, han contribuido a cambiar significativamente el mundo del trabajo. De un empleo asalariado “tradicional” (estable, normado y con derechos reconocidos) se pasa en forma creciente a una situación de mayor flexibilidad, donde las regulaciones laborales retroceden y la relación entre trabajo y vida social muta en grado considerable.

El crecimiento del sector terciario en la economía altera la preeminencia que el sector secundario tenía en el empleo, tornando más centrales algunas modalidades de trabajo cuyos rasgos difieren, en muchos sentidos, del tradicional empleo industrial. Según las series históricas actualizadas de la estructura ocupacional antes mencionadas, entre 1971 y 2009 la clase obrera de la industria y la

38 Ídem.

construcción ha visto decrecer en un 15,74% su participación en la población económicamente activa. Es decir, se redujo en más de la mitad el peso que detentaba en 1971, pasando de un 25,8% en aquél año a un 10,1% en 2009. Por otra parte, la clase obrera del comercio y los servicios (trabajadores no calificados del sector terciario) acrecentó en un 8,47% su participación, pasando de un 7,4% a 15,9% en el período en cuestión, duplicando así su peso en la estructura ocupacional.

Se trata de una tercerización que implica el crecimiento de ocupaciones considerablemente heterogéneas. Se superponen aquí nuevas y viejas modalidades, incluso algunas habitualmente tenidas por marginales (ligadas a la subsistencia); proliferan al punto de integrarse a procesos vinculados a los ámbitos más dinámicos de la actual modalidad de crecimiento, con lo cual no resultan exclusivas de los trabajadores más marginales y/o menos calificados, sino que se encuentran en diversos estratos del mercado laboral y la estructura social. De este modo, aparecen tanto asalariados menos dependientes, como formas de trabajo independiente que resultan de hecho cada vez más dependientes. Lo cual hace hoy más difusos los límites entre el trabajo asalariado y el trabajo independiente.

La descentralización y la alta movilidad laboral llegan tan lejos, que un número creciente de trabajadores termina integrado al proceso de producción de bienes o servicios bajo fórmulas contractuales y organizacionales que los sitúan en esta creciente “zona gris” entre el trabajo dependiente e independiente. Ejercen sus actividades laborales a distancia -desde la calle y/o sus domicilios-, apoyados en las nuevas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación, tales como redes computacionales, internet o la telefonía móvil y, en el marco de sus compromisos laborales y/o comerciales, tienen que estructurar su trabajo de acuerdo a criterios tanto técnicos como económicos. El resultado es que la tradicional lógica laboral se desarma, dividiendo los procesos productivos cada vez más en establecimientos diferentes ligados entre sí, lo que ha permitido distribuir entre ellos el riesgo empresarial relativo a pérdidas y ganancias, según las asimétricas relaciones de poder y de acceso a los mercados. Recientes datos muestran que más de la mitad de los asalariados presenta rasgos flexibles que lo alejan de las modalidades tradicionales³⁹.

Resulta pertinente anotar que no necesariamente todas estas posiciones resultan asociables a la imagen de precariedad. A diferencia de las consideraciones de Portes acerca de la conformación de una suerte de proletariado informal, como principal categoría en el empleo tras la crisis de los años ochenta en América Latina⁴⁰, Tokman ha mostrado que en nuestro país se asiste a un

39 Según datos de la encuesta metropolitana CIES de 2009. Incluso la cifra resulta conservadora, en tanto se consideró a quienes tenían un contrato a plazo fijo, y presentaban características tradicionales en los demás ámbitos, como parte de los asalariados tradicionales.

40 Portes, A., Hoffman, K. (2007) “Las estructuras de clase en América Latina: composición y cambios en la época neoliberal”, en Atria, R., Franco, R., León, A. –coordinadores- (2007) *Estratificación y movilidad social en América Latina*, Lom, Santiago.

proceso continuo de reducción de la informalidad⁴¹. En Chile hoy, muchos empleos con rasgos habitualmente asociados a la figura de precariedad, como aquellos marcados por la inexistencia de contrato escrito o la ausencia de sistemas de previsión social, por nombrar algunos, aparecen incluso en los sectores más dinámicos de la economía vinculados a posiciones profesionales de altos ingresos. La informalidad atraviesa así la estructura social, sin concentrarse en forma exclusiva en la parte más baja.

Más allá que ello represente fenómenos de exclusión o inclusión social a partir del empleo, los asalariados flexibles exhiben un comportamiento distinto en la relación entre trabajo y vida social. Mientras apenas un 8,4% de los asalariados tradicionales considera que su tiempo de trabajo se distribuye en forma irregular, tal cifra se triplica en los empleos flexibles, llegando al 25%⁴². Entre estos últimos, la relación entre su vida privada y su trabajo resulta considerablemente más compleja, por lo que no logran proyectarse con el mismo nivel de diferenciación y predictibilidad que antaño los momentos de ocio y trabajo. Al contrario, se tiende a una invasión del primero a manos del segundo, haciéndose más difícil la elaboración de una rutina para ambas dimensiones, y con ello, un orden armónico de participación tanto en relaciones sociales, tanto familiares como laborales.

Por lo demás, se trata de una yuxtaposición de trabajo y vida social que pasa inadvertida con no poca frecuencia. Si el antiguo régimen de trabajo permitía una distinción nítida entre ambos órdenes, en la medida que el tiempo de permanencia en el hogar y el trabajo resultaba rutinario y predecible, gracias a las nuevas tecnologías de la información hoy las relaciones laborales acompañan a muchos trabajadores a cualquier lugar. No se precisa “estar” en un lugar definido de labor, sino tan sólo estar disponible -el celular “encendido”- para que la antigua distinción pierda nitidez. Resulta común que tal situación no se advierta como “trabajo” por el propio trabajador.

Tal laxitud del trabajo contemporáneo, la flexibilización de las regulaciones, y la aparición de nuevas modalidades de empleo, han creado una “zona gris” donde resulta difícil abordar las relaciones laborales con enfoques tradicionales. En tal sentido, el mismo derecho laboral retrocede ante el derecho civil. Como resulta conocido, el derecho laboral norma la relación entre capital y trabajo tendiendo a reconocer una asimetría de poder, y a establecer por ello una fuente de derechos laborales a los trabajadores. Permite que se organicen y ejerzan el derecho a huelga (al menos, en principio). Si la frontera entre el trabajo y la vida social resulta cada vez más difícil de dibujar, y además han retrocedido las instituciones reguladoras, aquellas relaciones laborales que aparecen por fuera de las más tradicionales se pasan a normar como un intercambio entre iguales (derecho

41 Tokman, V. (2001) (coord.) *De la informalidad a la modernidad*, OIT.

42 Datos de la encuesta metropolitana CIES de 2009.

civil), negándose el principio de los derechos laborales, situación que, como es fácil de advertir, afecta a las nuevas modalidades de trabajo.

Tal panorama refleja una distinción considerable entre la situación de los trabajadores de segmentos más tradicionales, donde existe tal noción y además se les permite organizarse, respecto a los nuevos asalariados, que carecen de formas de agrupación y representación de intereses, y a los que, por lo demás, poco les ajustan aquellas formas tradicionales de estructuración sindical. De hecho, nada hay de extraño en la desidentificación que guardan frente a estas últimas. Si en el primer caso, el acceso a derechos laborales permite una mayor capacidad de presión para asegurar una posición más privilegiada; en el segundo caso, se carece tanto de legitimidad social como de posibilidad jurídica de organización en esta perspectiva, y a menudo se ven enfrentados a los privilegios que detentan los primeros, tal como se ha apreciado en conflictos laborales de los últimos años.

NUEVOS MALESTARES Y FUENTES DE CONFLICTO

Como se ha visto, la discusión de la pobreza lleva más a la preocupación por la desigualdad que a la disquisición por su corte exacto, en tanto no diferencia realidades sociales sustantivas, sino que otorga y quita asignaciones sobre una población bastante homogénea en tal sentido, sometida a un alto grado de rotación de la posición que detenta en la escala de ingresos. El panorama actual de la desigualdad, marcado por una alta concentración del ingreso y una homogenización de las condiciones de vida de la mayoría, resulta cruzado por la restricción de derechos sociales universales, y con eso poblado de individuos que deben recurrir al mercado para satisfacer sus demandas básicas, en condiciones que, por su alta volatilidad, afectan las formas tradicionales de estructuración de la vida cotidiana, abriendo con ello paso a importantes cambios culturales.

Entre otras cosas, esto impacta en el tipo de malestares que presenta la sociedad chilena. El patrón de conflictos sociales difiere en una sociedad con alta concentración del ingreso, respecto de una en la que ésta es menor, en tanto la última ofrece mayores espacios de proyección para las aspiraciones de diversos grupos sociales. Lo anterior, no sólo alude a la falta de fluidez en el acceso a las posiciones más elitarias. Como vimos, el panorama social actual de la sociedad chilena aparece marcado por sucesivas formas de “cierre social”, a través de los cuales se intenta la defensa de los privilegios relativos. En esta situación, son las nuevas condiciones sociales las que a menudo, a pesar de su sostenida expansión, salen más perjudicadas. Tal es el caso, por ejemplo, de la relación entre los trabajadores con derechos y aquellos que encarnan, precisamente, estas nuevas situaciones y no acceden por ello a tales derechos laborales. Una situación que, en definitiva, aparte de beneficiar a la condición empresarial, también permite la defensa de los privilegios relativos por parte de los trabajadores del segmento más organizado y

depositario de derechos. De hecho muchas de las movilizaciones protagonizadas por trabajadores subcontratados en 2007 y 2008, mostraron la agresión de éstos hacia los trabajadores de planta. Así producto de los cambios anotados en el mundo del trabajo, los conflictos que tienen lugar allí, no sólo enfrentan a empleados y empleadores, sino a trabajadores entre sí.

En cambio, el malestar mesocrático se articula en torno a la promesa incumplida de movilidad social vía educación. Aunque la cobertura de educación se ha expandido en todos los niveles en las últimas décadas, la movilidad intergeneracional de ingresos ha variado poco⁴³. Ello ha instalado una crítica no a la estrategia credencialista en sí, sino a la calidad del sistema educacional en general -como factor de agudización de las diferencias sociales- que impide a dicha estrategia una viabilidad mayoritaria. La medida en que concita un generalizado apoyo el movimiento de estudiantes secundarios de 2006, tras la exigencia de “igualdad de oportunidades”, da cuenta de la alta legitimidad social que alcanzan estas aspiraciones.

De todas maneras, por corto que sea su alcance en términos relativos, la movilidad social ha logrado instalar importantes sectores nuevos en zonas más exclusivas. Además el sostenido crecimiento económico ha permitido la aparición de nuevas fortunas. Empero, el empuje de la “plata nueva” es resistida con nuevas modalidades de distinción amparadas en el gusto y el tipo de consumo. Las formas de vida de los sectores con más tradición en la zona alta abrazan distintos elementos en aras a distinguirse de lo común. Algunos aparecen en las formas más impensadas. Contardo ha abordado, entre otros aspectos culturales de la desigualdad, lo que llama “abajismo” en dichos sectores, que recuperan aspectos de la vida popular precisamente como mecanismo de diferenciación ante los patrones imitativos -en sentido inverso- que distinguen a los “nuevos ricos”, desesperados por la ostentación⁴⁴. A ello se vincula el resurgimiento de bares como La Piojera o cierta valoración *kitsch* de la música popular.

Pero, acaso por ubicarse en las esferas más altas del poder, más determinante para el conjunto de la sociedad resulta un conflicto apenas evidenciado este año en torno a la posibilidad de establecer regulaciones más claras y abiertas sobre las condiciones de competencia. En forma cada vez menos tímida, ha aparecido en sectores de la derecha la tesis que el modelo chileno necesita reformas profundas, encaminadas a estructurar un mercado más competitivo, y como tal, acorde a los desafíos de la reactivación del crecimiento acelerado. No es casual que ello anime a aquél empresariado que ha sido capaz de trascender el mero atesoramiento en condiciones rentistas, por lo general, proyectándose en nuevos mercados en el extranjero. La discusión se cruzó con la línea de reconstrucción

43 Núñez, J., Risco, C. (2005) *Movilidad intergeneracional del ingreso en Chile*, [en digital] Serie En Foco, Expansiva, Santiago.

44 Contardo, C. (2008) *Siútico, arribismo, abajismo y vida social en Chile*, Vergara, Santiago.

a seguir tras el terremoto. En esa oportunidad, el gobierno anunció en forma sorpresiva un alza temporal en los impuestos a las grandes empresas⁴⁵. Si la medida resultaba inédita, incluso para los gobiernos de la Concertación, las críticas más enconadas vinieron del seno de la propia derecha. Büchi acusó que “*es como si hubiésemos elegido a Marco Enríquez-Ominami*”⁴⁶; Novoa alegó que “*en política uno tiene que reafirmar los valores propios y no los del adversario*”⁴⁷; el Instituto Libertad y Desarrollo espetó que “*el gabinete económico de excelencia que llevó Piñera al gobierno, merece un destino más glorioso que el de recurrir al simple expediente de subir los impuestos para financiar un déficit*”⁴⁸.

La polémica creció cuando la agenda regulatoria llegó al capital financiero. Como parte de un paquete de reformas al mercado de capitales, que incluye cambios en los instrumentos derivables y contratos de seguros, además de la creación del llamado “SERNAC financiero”, el gobierno anunció el fin de la denominada “venta atada” de productos financieros⁴⁹. Pronto, las presiones dejaron en evidencia diferencias al interior del propio gobierno, personificadas en los ministros Larraín y Fontaine, y la tensión creció con los llamados a articular una “nueva derecha” capaz de conquistar el centro político, aún cuando ambas cuestiones no coinciden necesariamente. En este cuadro, El Mercurio -actor determinante- terminó por tomar posición a través de un llamado a constituir “*un sistema financiero competitivo*” e incluso, para que no quepan dudas, exhorta a construir una “*economía política de competencia*”⁵⁰, aludiendo no sólo al modelo económico sino al tipo de sociedad al que se vincula. Llama, así, a una transformación económica y social más ambiciosa. En sus propios términos: “*Un desafío para Chile es elevar su productividad y, por esa vía, su crecimiento de largo plazo. Las actuales tasas de crecimiento están motivadas por una fuerte expansión de la demanda agregada que aún no es acompañada por un aumento importante y tendencial del producto (...) La contribución que a este objetivo puede hacer un mejor sistema financiero no parece suficientemente reconocida (...) Siempre va a existir resistencia a cambios que aumenten la competencia en el sistema financiero, porque ellos no sólo producen ganadores, sino también perdedores, y además porque no es fácil identificar reformas que efectivamente produzcan competencia y no atenten contra la eficiencia del sistema. Algo de esto ha originado las tensiones que se evidencian en el equipo económico del Gobierno respecto de cómo debe tratarse la venta conjunta de algunos productos financieros*

45 Piñera anuncia alza de impuestos a empresas, tabaco, royalty y venta de activos del Estado, La Tercera, 16 de Abril de 2010.

46 Críticas al alza de impuestos para reconstruir Chile, El País, 23 de Abril de 2010, España.

47 Impuestos de Piñera: perplejos y descontentos, El Mostrador, 26 de Abril de 2010.

48 Impuestos y reconstrucción, columna de Luis Larraín, Revista Capital, 23 de Abril de 2010.

49 Hacienda busca el fin de la venta “atada” de productos bancarios, Radio Cooperativa, edición digital, 22 de Septiembre de 2010.

50 El Mercurio, editorial del 4 de Diciembre de 2010: *Un sistema financiero competitivo*.

(...) La demanda por propuestas en este campo no es arbitraria, sino que obedece a presunciones fundadas respecto de poca competencia. Por ejemplo, los márgenes netos de intereses en Chile son superiores a los de países de similar o superior ingreso per cápita, y por diferencias no menores'⁵¹. Cabe agregar que la editorial de El Mercurio no se escribe en clave populista sino, al contrario, en una que entrega lineamientos escuchados con especial atención por los diversos sectores que componen la elite chilena. Habrá que ver que pasa.

51 Ídem.